



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -
Expediente No.: 11001-33-35-010-2020-00067-00

Bogotá D.C., ocho (08) de julio de dos mil veintiuno (2021)

ACCIONANTES: EVELIO ACOSTA FORERO, NUBIA STELLA FRANCO ORJUELA, MARÍA DIONISIA ROA DÍAZ, ALFONSO ROA y JHON FREDY ORJUELA OSORIO

ACCIONADOS: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE ANOLAIMA y ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTELARGO, SAN JERÓNIMO, MILÁN Y LIMONAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA- ACUAMILI.

REFERENCIA: INCIDENTE DE DESACATO- ACCIÓN DE TUTELA N° 11001-33-35-010-2020-00067-00

A través de auto calendarado 02 de junio del año en curso, se dispuso sancionar con cinco (5) días de arresto y con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al señor Nicolás García Bustos en su calidad de Gobernador del Departamento de Cundinamarca, y al señor Luis Hernando Martínez Zabaleta, quien actualmente ostenta el cargo de Alcalde del Municipio de Anolaima, por desacatar lo ordenado en los numerales 2º y 5º de la providencia del 25 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En atención a lo anterior, a través de correo electrónico fechado 03 de junio del corriente, el Alcalde del Municipio de Anolaima interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión señalada en precedencia, con el argumento que no ha incurrido en desacato, habida cuenta que si bien, a la fecha no había allegado los respectivos informes que le fueron ordenados, no con ello quiere decir que la Alcaldía no haya hecho nada al respecto. Para sustentar su dicho aportó copia, entre otras, de las actas de reunión llevadas a cabo con ocasión al caso en controversia, de los meses julio, agosto, octubre y noviembre, todos del año 2020, así como del respectivo plan de acción y cronograma de actividades.

Así mismo, sustentó, entre otros asuntos, que como quiera que la gestión del plan departamental de aguas radica en cabeza de las Empresas Públicas de Cundinamarca, la Alcaldía no tiene el manejo directo de los trámites administrativos que se requieren para satisfacer el objetivo ordenado en la sentencia de segunda instancia, lo que conlleva a que su papel consista en hacerle el seguimiento a las actividades ejecutadas por la entidad pública de la referencia, para lo cual aportó la documental señalada en el párrafo anterior.

Ahora bien, para el Despacho es importante resaltar que la figura de incidente de desacato de tutela goza de una normativa especial, la cual se encuentra regulada por el Decreto 2591 de 1991, más precisamente en el artículo 52 en donde se indica que *“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. (...) La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo”*. (Negrilla fuera de texto).

Como bien se observa del artículo anteriormente transcrito, en ningún momento se hace referencia a que frente a los autos donde se ordena sanción por desacato a orden de fallo de tutela, se pueda interponer recurso alguno, a lo único que hace alusión es a que dicha decisión debe ser consultada al superior jerárquico, quien para el caso que nos ocupa es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Al respecto la H. Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha manifestado frente al tema en controversia, como es el caso de la tutela T-325 de 2015, donde señaló que:

*“De la misma forma, las disposiciones del decreto reglamentario de la acción de amparo antes transcritas, llevan a concluir que **contra las decisiones tomadas en el trámite del incidente de desacato o de la solicitud de cumplimiento de un fallo de amparo, no procede recurso alguno, salvo que el juez de primera instancia sancione con desacato a quien ha incumplido el fallo de tutela, en cuyo caso dicha decisión será consultada ante el Superior.** Asimismo, tal y como lo ha reconocido este Tribunal, “las decisiones que se tomen en el trámite del incidente de desacato, no deben ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual Revisión”. (Subrayado y negrilla por fuera de texto).*

Con base en todo lo anteriormente expuesto, se declarará improcedente la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentados por el Alcalde del Municipio de Anolaima contra la decisión adoptada en providencia calendada 02 de junio del año en curso proferida por esta Agencia Judicial.

Por otra parte, a través de correos electrónicos fechados 04 y 17 de junio del año curso, la Gobernación de Cundinamarca allegó escritos, indicando, entre otros asuntos, las múltiples actuaciones que ha desarrollado con el propósito de tratar de dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia de segunda instancia, pero que no obstante, al depender de otras entidades para poder llevar a cabo dicha tarea, manifiesta que se encuentra ante lo imposible para acatar en debida forma los términos ordenados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así mismo, mediante correos electrónicos de fechas 8 y 22 de junio último, el Representante Legal de Acuamili y el señor Evelio Acosta Forero, este último en representación de todos los aquí accionantes, allegaron escritos, respectivamente, aludiendo por una parte la entidad, que evidentemente la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía del Municipio de Anolaima, a la fecha no han dado cumplimiento a las órdenes impartidas en segunda instancia, asimismo señaló que de los argumentos expuestos por el Alcalde del Municipio de Anolaima en la contestación que allegó, hay algunos que no son ciertos, como lo es, entre otros, el siguiente: *“No es cierto lo que manifiesta la accionada Alcaldía municipal de Anolaima en cuanto a que la Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos de Anolaima priorizó en el plan de acción para la vigencia 2020 – 2023 el proyecto denominado Estudios y Diseños para la optimización del Acueducto de las veredas La Esmeralda, Montelargo, San Jerónimo, Milán y Limonal del municipio de Anolaima (Incluye PTAP) comprometiendo los recursos necesarios para la construcción y puesta en marcha de este mencionado proyecto. (...)”*. De otro lado, la parte actora también desmintió lo señalado por el Alcalde de Anolaima en su escrito de contestación, en el sentido de considerar, entre otros asuntos, que éste no pretende cumplir con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, es claro que la Alcaldía del Municipio de Anolaima y la Gobernación de Cundinamarca, hasta el momento no han dado cabal cumplimiento a todo lo ordenado por el Superior a través de la sentencia de fecha 25 de agosto

de 2020. Que independientemente de las circunstancias que no les hayan permitido cumplir de forma integral con lo ya señalado, se reitera que las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueron más que claras y en su momento éstos no se opusieron frente a dichas decisiones.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentados por el Alcalde del Municipio de Anolaima contra la decisión adoptada en providencia calendada 02 de junio del año en curso proferida por esta Agencia Judicial; acorde con lo señalado en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: Declarar que el señor Nicolás García Bustos en su calidad de Gobernador del Departamento de Cundinamarca, y al señor Luis Hernando Martínez Zabaleta, quien actualmente ostenta el cargo de Alcalde del Municipio de Anolaima, continúan renuentes en dar cumplimiento de forma integral a lo ordenado en los numerales 2º y 5º de la providencia del 25 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; acorde con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

TERCERO: Por Secretaría de este Juzgado, de forma inmediata dese cabal cumplimiento a lo ordenado por esta Agencia Judicial en el numeral séptimo de la providencia de fecha 02 de junio de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO
JUEZ (E)

JGR